

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., primero (01) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

Rad: 11001-31-100-30-2021-00015-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por el ciudadano **GUILLERMO ANTONIO BOSSA LASCARRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.714.183 contra la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**.

**ANTECEDENTES**

El ciudadano **GUILLERMO ANTONIO BOSSA LASCARRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.714.183 a nombre propio inicia acción de tutela contra la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS** por considerar que se le están vulnerando los derechos fundamentales de **PETICIÓN** y de **IGUALDAD**.

**HECHOS Y PRETENSIONES**

Refiere el accionante que interpuso derecho de petición ante la entidad accionada el 05 de noviembre de 2020, solicitando que se dé una fecha cierta en la cual podrá recibir sus cartas cheque toda vez que cumplió con el diligenciamiento del formulario y la actualización de datos.

Que la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, no contesta el derecho de petición, ni de forma ni de fondo; pues no informa una fecha cierta cuando va a desembolsar el monto de la indemnización por el desplazamiento forzado.

Manifiesta que, la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, al no contestar de fondo la petición no solo viola el derecho de petición, sino

que vulnera los derechos fundamentales a la verdad, indemnización, igualdad y los demás consignados en la tutela T025 de 2004.

Señala que, **LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS** manifiesta en una de sus respuestas que debe iniciar el PAARI y ya lo inicio; además, firmo el formulario del plan individual para reparación integral (PIRI) anexando los documentos, manifestándole que en un mes pasara por la carta cheque para cobrar la indemnización por víctima de desplazamiento forzado.

En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele los derechos fundamentales de **PETICIÓN** e **IGUALDAD**; y se ordene a la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS** contestar el derecho de petición de fondo manifestando una fecha cierta en la cual serán emitidas y entregadas sus cartas cheques.

### **PRUEBAS**

La parte accionante anexa con el escrito tutelar, los siguientes documentos:

-Derecho de petición dirigido a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con radicado No. 20207111640771-2., con fecha del 05/11/2020.

### **ACTUACIÓN PROCESAL**

1.- Admitida la tutela el 19 de enero de 2021, se ordenó la notificación a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**, para que en el término de dos (2) días se pronunciaran sobre los hechos materia de la presente acción.

2.-El 21 de enero de 2021, se notificó a través del correo institucional del Juzgado **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.- Dentro del término legal conferido allego contestación a la acción de tutela la accionada **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**.

**CONTESTACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.**

La accionada refirió: “(...) Frente a la petición que manifestó elevar el accionante, me permito señalar que la misma fue resuelta por parte de la Unidad para las Víctimas por medio de comunicación escrita con radicado interno de salida No. 20217201399981 del 22 de enero del 2021, al que se adjunta certificación del RUV”.

## **CONSIDERACIONES**

### **Aspectos preliminares**

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

### **Naturaleza jurídica de la acción de tutela**

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

### **Procedencia de la acción de tutela.**

El ciudadano **GUILLERMO ANTONIO BOSSA LASCARRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.714.183 se encuentra legitimado por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales de **PETICIÓN** e **IGUALDAD** en virtud de lo dispuesto en el art. 86 de la Constitución Política de Colombia. *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera*

*que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.*

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, es una entidad del orden nacional con autonomía administrativa y patrimonial perteneciente al sector de la Inclusión social y la reconciliación, liderado por Prosperidad Social, además, es el ente a quien se endilga el actuar vulnerador de los derechos invocados por el accionante.

### **Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado.**

#### **Derecho Fundamental de Petición**

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:

“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.

El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).

La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.

Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la repuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía". (Sent. T-220/94).

El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, dispone: "Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales".

## DEL CASO EN CONCRETO

Corresponde a esta Juzgadora determinar si la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS** se encuentran vulnerando los derechos fundamentales de **PETICIÓN** e **IGUALDAD** al no contestar de forma y de fondo el derecho de petición elevado por el ciudadano **GUILLERMO ANTONIO BOSSA LASCARRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.714.183, el día 05 de noviembre de 2020 y radicado bajo el No. 2020711640771-2.

Dentro de la documental aportada, se advierte derecho de petición elevado por el accionante ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, del que se lee: “(...) De acuerdo a lo anterior y de acuerdo al formulario diligenciado en mi caso de indemnización por el hecho de victimizante de desplazamiento forzado en particular cuando me entregan la carta cheque.2. De acuerdo a mi proceso se me asigne una fecha exacta del desembolso de estos recursos.3. Ya se vencieron los 120 días hábiles sin a la fecha recibir una respuesta de fondo. 4. Se le expida una copia de certificación de inclusión en el RUV”. Como datos de notificación se informó el “luzdaysbossa@gmail.com”.

Con la contestación de la demanda, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, arribo contestación del derecho de petición, escrito radicado bajo el No.20217201399981 dirigida al correo “ [luzdaysbossa@gmail.com](mailto:luzdaysbossa@gmail.com) ” del que se lee: “Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de dar respuesta a su petición, le informamos que usted elevó solicitud de indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento Forzado el 26 de noviembre del 2020, fecha en la que se recibió la documentación completa, con número de radicado 3582502, fecha en la que se le informó que la Unidad cuenta con un término de ciento veinte (120) días hábiles para brindarle una respuesta de fondo en la que se indicará si tiene derecho o no a la entrega de la medida de indemnización administrativa, por lo anterior, nos encontramos dentro del término de análisis de su solicitud. Es preciso advertir que, de ser procedente la medida, pero no acreditarse alguna situación de urgencia manifiesta o de extrema vulnerabilidad previstas en el artículo 4 de la Resolución No. 01049 del 15 de marzo de 2019, el orden de otorgamiento o pago de la indemnización estará sujeto al resultado de la aplicación del Método Técnico de Priorización”. Además, se adjuntó certificación del RUV.

De lo anterior el Despacho pasa a realizar las siguientes consideraciones:

Ha dicho la honorable Corte Constitucional, frente a la contestación de las peticiones que deben emitir las autoridades administrativas "... c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: **1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario...**" (subrayado y negrilla por el Despacho).

No obstante lo anterior, frente a peticiones de acceso a la medida de indemnización por vía administrativa la Resolución 01049 del 15 de marzo de 2019, dispone lo siguiente: **"Artículo 11. Fase de respuesta de fondo a la solicitud.** Se trata de la fase en la cual la Unidad para las Víctimas resolverá de fondo sobre el derecho a la indemnización. Una vez se entregue a la víctima solicitante el radicado de cierre de la solicitud en los términos del artículo 7, **la Unidad para las Víctimas contará con un término de ciento veinte (120) días hábiles** para resolver de fondo la solicitud, al cabo de lo cual, la Dirección Técnica de Reparación deberá emitir un acto administrativo motivado en el cual se reconozca o se niegue la medida (...)". El subrayado pertenece al actor.

Es por lo anterior, que considera la Juzgadora que, pese a no existir pronunciamiento de fondo por parte de la accionada a la solicitud de indemnización administrativa elevada por el actor, dicho actuar no ha vulnerado los derechos que se invocan en la presente acción constitucional; al advertirse que a la fecha no han transcurrido los 120 días con los que cuenta la entidad accionada para brindar una respuesta de fondo. Aunado a lo anterior en la contestación se remitió al canal informado por el accionante y se anexo certificación del RUV.

Por lo anterior y sin más consideraciones no se tutelarán los derechos fundamentales invocados por el ciudadano **GUILLERMO ANTONIO BOSSA LASCARRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.714.183.

**EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,**

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: NEGAR** el amparo deprecado por el ciudadano **GUILLERMO ANTONIO BOSSA LASCARRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.714.183 contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**, conforme a la parte motiva de esta decisión.

**SEGUNDO:** Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

**TERCERO:** Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

**CUARTO:** Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

**NOTIFÍQUESE,**

**Firmado Por:**

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS**

**JUEZ**

**JUEZ - JUZGADO 030 DE CIRCUITO FAMILIA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**b586fe87b89a6856499eac02e586fd83266ea4814f450bfdebbbe65210d53feaf**

Documento generado en 01/02/2021 03:32:47 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**